ACERCA DE LA INTERPRETACION E INTEGRACION DE LOS CONTRATOS CIVILES

Noemi Lidia NICOLAU

1. A la teoría del funcionamiento de la norma contractual le corresponde un lugar significativo en la teoría de la interpretación, la que, a su vez, constituye uno de los núcleos básicos de la filosofía del derecho (1). La interpretación de los negocios jurídicos, en especial de los contratos, plantea problemas que requieren ciertas consideraciones dentro de dicha teoría. En el presente trabajo abordaremos dos aspectos (2): por un lado nos detendremos en el análisis de las reglas de interpretación del derecho positivo argentino, y, en una segunda parte estudiaremos la interpretación de la norma contractual por el encargado del funcionamiento (3).

A) Las reglas de interpretación de los contratos civiles en el derecho positivo argentino

2. Cuando nos referimos a las reglas de interpretación e integración de los contratos, comprendemos al conjunto de reglas generales de interpretación insertas en algunos Códigos, en la teoría general del contrato y también a numerosos preceptos legales, referidos a determinados contratos e institutos del derecho contractual, dispersos en las codificaciones y leyes complementarias.

En el Código Civil Argentino, antes de la reforma de 1968, no existían reglas generales de interpretación de los contratos, salvo la regla contenida en el derogado art. 1198 (4), considerada por algunos no regla interpretativa, sino una referencia al efecto de los contratos (5). Pero el codificador civil incluyó numerosas reglas particulares de interpretación de manifestaciones contractuales, por ejemplo, las contenidas en los Arts. 1504, 1507, 1627, 1880 (6); 533, 541, 561, 570, 651, 874, 1632, 1635 (7); 1354, 1424, 1554, 1818, 1871, 2206, 2221, 2248, 2268 (8), a las que nosotros agregamos los Arts. 1173, 1185, 1622, 1995, 1997, 2005, 2100, 2217.

3. Con respecto a las normas sobre interpretación de los contratos civiles, el primer problema que se plantea es conocer cuál fue la intención de Vélez Sársfield, al no incorporar reglas generales en el Código.

Creemos que su verdadero propósito fue no incluirlas. Llegamos a esa conclusión atendiendo a las siguientes circunstancias: las fuentes de Vélez fueron, entre otras, el Código Francés, el Código Italiano de 1865, el Código Español, el Código Civil de Holanda, el de Nápoles, todos los cuales incluían expresamente reglas de interpretación de los contratos. Si Vélez, conociendo la corrien

(*) Investigadora del Consejo de Investigaciones de la Univ. Nac. de Rosario.
te codificadora de su época, no las incluyo, es porque su voluntad era claramente no hacerlo. Algunos autores sostienen que esa omisión responde a la intención del legislador de no reiterar normas que ya estaban en el Código de Comercio redactado para la Provincia de Buenos Aires por el mismo ilustre jurista cordobés y el Dr. Acevedo y declarado Código Nacional por la ley 15 promulgada el 12 de setiembre de 1862. Creemos que no es así. Las reglas insertas en los Arts. 295 a 298 del referido Código de Comercio, no responden a la exclusiva voluntad de Vélez, por el contrario, la influencia de Acevedo es notables, en lo que concierne a obligaciones y contratos (9), por lo que no puede afirmarse que el primero haya expresado demasiado su voluntad en esta sección. Por otra parte, sostener que el Codificador civil no quiso reiterar normas que ya estaban en la legislación comercial, implica olvidar que en el Libro II título I cap. I a IV del Código de Comercio de 1862 se legisla abundantemente sobre obligaciones y contratos, y que muchos de esos preceptos fueron luego incluidos por Vélez en el Código Civil en razón de su naturaleza estrictamente civil (10) ¿Por qué excluiría las reglas de interpretación? Parece claro que su voluntad era dejar en libertad al intérprete. Por otra parte, debe tenerse presente que el Dr. Vélez poseía un concepto muy claro de Código y conociendo que éste se caracteriza por su complejidad y hermeticidad no se entiende cómo justificaría una remisión a otro cuerpo codificado (10 bis).

El segundo problema es determinar si es necesario para el intérprete contar con normas legales de interpretación, de tal modo que su carencia le obligue a elaborarlas mediante la autointegración del ordenamiento normativo, por la única vía de la analogía.

Si como hemos afirmado el legislador civil no ha querido establecer reglas de interpretación, si los códigos más modernos adoptan el mismo criterio, con algunas excepciones como el Código Civil italiano de 1942, incluyendo sólo algunas pocas normas que constituyen principios generales, standards o normas abiertas (11), podemos afirmar que el intérprete del contrato civil, puede y debe hacer funcionar las normas contractuales acudiendo a las reglas interpretativas que le fijen la jurisprudencia, la doctrina o si se parecen justos para el caso concreto, los preceptos legales del Código de Comercio, teniendo como normas coativas sólo las del Código Civil.

Analizando la doctrina y jurisprudencia nacionales en el tema a que nos estamos refiriendo, se observa que ante la falta de reglas del Código Civil, se impuso a través de la ejemplaridad por el modelo seguimiento, la recurrencia al Código de Comercio (12). La escuela imperante de neto corte positivista, necesitaba encontrar el precepto legal donde ampararse e impuso la remisión por analogía con apoyo en el Art. 16 del CC de tal modo que hoy ya constituye un verdadero derecho consuetudinario. Aun más si ejemplaridad llegó a tales
extremos que no sólo se consideran aplicables las reglas del código mercantil, sino que algunos entienden que son coactivas para el juez, no simples consejos o directivas. Como consecuencia, sostienen que debe aplicarse el criterio del derecho comercial e interpretar, primero, por las reglas subjetivas y luego por las objetivas (13).

4.1. Abordando ya el estudio de las normas legales interpretativas e integrativas de los contratos civiles, debe señalarse que sus fuentes formales se encuentran: a) en el Art. 1198 CC, reformado por la ley 17711, que incorpora el principio de la buena fe creencia y buena fe lealtad, no sólo para la interpretación, sino también para la celebración y ejecución de los contratos; b) en múltiples preceptos dispersos en el Código Civil y en sus leyes complementarias; c) en los Arts. 217, 218, 219 del Código de Comercio. Según nuestra opinión, las normas señaladas en a) y b) son coactivas para el intérprete de un contrato civil, no así las del grupo c) que son supletorias para el mismo, sin perjuicio de que sean consideradas coactivas en el funcionamiento del contrato comercial (14).

La regla de la buena fe tiene mayor jerarquía que las reglas particulares de interpretación y aun que las normas del Código Comercial, por lo que debe privar sobre todas ellas.

En cuanto al funcionamiento de las normas legales interpretativas, creemos que el encargado del mismo está autorizado para interpretarlas (15), y en caso de que generen una injusticia al ser aplicadas, puede no aplicarla, y, produciendo una carencia dikelógica, elaborar la norma interpretativa justa (16). Puede tomarse como ejemplo la regla del Art. 218, inc. 6° y la del Art. 219 del Código de Comercio, según las cuales la costumbre del lugar donde deba ejecutarse el contrato prevalecerá sobre las palabras del mismo o servirá para su integración. El legislador ha sido claro que la costumbre que debe considerarse es la del lugar del cumplimiento de las prestaciones que se deben los contratantes. Al interpretar, no podríamos apartarnos de esa voluntad expresa del codificador. Sin embargo, creemos que esta regla merece una elaboración, pues no siempre es justa; en determinados casos el juez debe estar habilitado para producir una carencia dikelógica y apartándose de ella deberá tomar en cuenta la costumbre del lugar del domicilio de los contratantes o de celebración del contrato. Si el objetivo del intérprete es llegar a conocer la real intención común de las partes (17), es evidente que en múltiples supuestos dicha intención estará en relación directa con la costumbre del lugar donde los contratantes se domicilien o hayan celebrado el contrato y no la del lugar de cumplimiento, costumbre que puede resultarles totalmente extraña (18).

Otra regla interpretativa que debe ser elaborada, es la del inciso 7° del
Art. 218, la conocida regla "favor debitoris" Según una interpretación gramatical, histórica, y sistemática sólo puede afirmarse que lo realmente querido por el legislador ha sido que, en caso de duda, debe estar por la liberación del deudor. Aquí plasma el espíritu liberal del codificador: ante la duda, el hombre debe ser libre, no sujeto a una obligación. Hasta aquí la interpretación. Creemos que esta solución no es siempre justa, es particularmente injusta en la contratación masificada, en la que existen contratantes con gran poder de decisión que predisponen el contrato, frente a contratantes "débiles", sometidos a contratar en aparente igualdad y libertad jurídicas. En estos casos, en los que existe verdadera desigualdad y subordinación económicas ha de estar, en caso de duda, no por la liberación del deudor (que puede resultar el contratante poderoso que ha predispuesto el contrato), sino por la liberación del más débil. De este modo se realiza la equidad, pero debe quedar claro que estamos transgrediendo la voluntad del legislador y procedemos a elaborar la norma interpretativa más justa para el caso concreto (19).

Entre las reglas particulares de integración encontramos el Art. 1627 del C.C. que ha sufrido una verdadera elaboración a través de la doctrina y jurisprudencia. Dicha norma expresamente manda interpretar que, cuando en la localización de servicios las partes no ajustaron el precio, se sometieron al "precio de costumbre para ser determinado por árbitros". Por un lado resulta injusto someter a los contratantes al costoso proceso arbitral para la determinación del precio, y por ello se admite actualmente que pueda ser el juez ordinario quien lo fije en caso de ser necesaria la integración del contrato. Por otra parte, si bien el referido precepto legal ordena tener en cuenta la costumbre, ha sido admitido y reiteradamente que el precio pueda fijarse no atendiendo a ella sino a las leyes de aranceles, cuando existan.

4.2. Si se observan las reglas legales de interpretación desde su dimensión sociológica, se advierte que el legislador ha adjudicado al intérprete la facultad de escudriñar la voluntad de las partes, imponiendo a éstas el deber de soportar los efectos de esa interpretación.

En esta dimensión corresponde preguntarse acerca de quién es el destinatario de las normas de interpretación. Creemos que en principio, son las partes contratantes, pues ellas son quienes, en primer término, deben interpretar su negocio jurídico para cumplirllo, pero el destinatario último es el juez, pues será quien en definitiva interprete cuando falla la interpretación auténtica de los contratantes (20)

En relación a la clase de reparto que plasma en las reglas interpretativas (referimos en este sentido al reparto autoritario, que proviene de una imposición o al reparto autónomo, cuando se origina en la negociación), es un reparto
autoritario: el legislador ordena el intérprete cómo debe entender.

Esa adjudicación no reconoce un límite proveniente de la naturaleza de las cosas, el límite lógico y síquico. En efecto, tratándose la interpretación de una tarea tan personal del intérprete, pues se trata de entender para obrar, lo correcto sería respetar el límite lógico y síquico del encargado del funcionamiento de la norma contractual, permitiéndole entender la voluntad de las partes por la vía que crea más conveniente a ese fin (21). El legislador debe cuidar que el intérprete no sea infiel a la voluntad de los autores de la norma, mas esa finalidad no la obtendrá imponiéndole reglas puntuales, pues siempre estará condicionada la interpretación por el contexto personal y social del intérprete (22). Cuando el reformador de 1968 fija una norma amplia de interpretación, como la buena fe, parece respetar en mayor medida dichos límites.

Las reglas de interpretación insertas en el Código de Comercio y el derecho consuetudinario que ha impuesto recurrir a ellas por analogía, responden sin duda a un plan de gobierno propio de un régimen liberal positivista: es necesario prever el orden en la interpretación; el juez debe contar con reglas precisas, debe seguir los pasos que se le indican para entender el negocio jurídico. La regla de la buena fe incorporada por la ley 17.711 también responde a un plan de gobierno: el reformador de 1968 quiso introducir en el código liberal principios solidaristas, sin embargo por tratarse de una regla muy amplia, una "norma abierta", permite en mayor medida el desarrollo de la ejemplaridad.

4.3. Desde el punto de vista de la justicia, las reglas de interpretación y especialmente las del Código de Comercio, denotan una tendencia a la realización de la justicia conmutativa, pues tratan de conocer la intención común de las partes para dar a cada uno en la medida de lo pactado originariamente. Pueden encontrarse referencias a la justicia espontánea (23), en el Art. 218 inc. 3º, por ejemplo, que remite a las reglas de la equidad o en el inc. 7º cuando indica interpretar en favor de la liberación del deudor.

Al establecer reglas de interpretación, el legislador, como ya dijimos, efectiviza el plan de gobierno, y de este modo trata de alcanzar el valor justicia a través de los valores poder y previsibilidad (24), mas éstos no son, precisamente los más altos valores del ordenamiento normativo. Allí se encuentran la justicia y la humanidad, los que se respetan cuando se permite al intérprete investigar, por el camino que crea más adecuado, la verdadera voluntad de los contratantes y luego de conocerla, si resulta contraria a dichos valores, autorizándolo a elaborar la norma que los respete.

La justicia permite valorar las normas de interpretación desde distintos puntos de vista, preguntándonos, por ejemplo, si es justo que el legislador imponga reglas de interpretación. Creemos que no, porque esta tarea es personalísi-
ma del intérprete, es una tarea súbita, intelectiva, que debe ser guiada por el mismo intérprete. El legislador no tiene facultades para imponer un camino obligatorio a la función más importante del poder jurisdiccional, podrá dar ciertas guías fundamentales, principios generales, pero no reglas precisas.

Con referencia al contenido mismo de la adjudicación legislativa, podemos observar que el codificador al arrogarse el derecho de establecer reglas de interpretación es un poderoso que, a su vez, es interesado en que los negocios jurídicos patrimoniales del derecho privado se interpreten del modo que más convenga al régimen. Uniformar la interpretación de los negocios privados puede intereser al poderoso, pero no debe olvidarse que también lo responsabiliza de las interpretaciones que se efectúen. El intérprete justificará la injusticia de su interpretación alegando que encuadra dentro de las reglas fijadas por el codificador.

B) La interpretación de las normas contractuales por el encargado del funcionamiento

5. Cuando un negocio jurídico es sometido a interpretación existe, en primer lugar, la norma interpretada, que es la norma contractual objeto de interpretación y, en segundo lugar, nace la norma interpretativa, que es aquélla en la que plasma la interpretación efectuada por el encargado del funcionamiento.

La norma interpretativa tiene como peculiaridad que no debe responder al pensamiento del intérprete sino ser fiel al pensamiento manifestado de los contratantes (25) En ella debe investigarse la fidelidad al pensamiento de los autores de la norma interpretada y asimismo observarse con detenimiento si es exacta, es decir, si se cumple (26) Hacemos notar que el análisis que efectuamos a continuación no siempre podrá extenderse a los contratos por adhesión a condiciones negociales generales, por cuanto ellos requieren reglas interpretativas propias por su especial naturaleza (27)

La aludida norma interpretativa describirá un sector social, un tipo legal y esbozará su reglamentación En la estructura de la norma interpretativa también debe coincidir el sector social por ella considerado con el de la norma interpretada y la consecuencia jurídica debe ser precisamente la querida por los contratantes y cuya dilucidación dio lugar a la interpretación.

Desde el punto de vista de la clasificación la norma interpretativa es siempre una norma individual, ya emane de las mismas partes contratantes, como de una sentencia judicial Es también norma categórica y coactiva (28)

La fuente formal de la norma interpretativa, puede ser un contrato (cuando los mismos contratantes efectúan la interpretación de su primitivo negocio jurídico) o una sentencia (cuando el encargado del funcionamiento de dicho negocio es el juez) Cualquiera sea el intérprete de las normas contractuales debe observar el negocio jurídico en su integridad, es decir, en la materialidad de los
hechos (las conductas de los contratantes anteriores, posteriores y concomitantes a la celebración del contrato) y en su fuente formal (el contrato), pues, si sólo atendiera a ésta última olvidaría investigar una de las funciones descriptivas de la norma contractual, su exactitud, ver qué acaece en la realidad.

En la interpretación del contrato deben observarse los elementos gramatical, lógico, sistemático e histórico (29). Desde el punto de vista gramatical las palabras deben interpretarse en su contexto, no por su significado literal, ni por lo que cada contratante entendió, sino por el sentido que en su intención común han querido darle ambos contratantes (30). En cuanto al elemento lógico, debe prevalecer si existen contradicciones. Este elemento permite, por ejemplo, que en caso de duda se esté por la validez del negocio, por cuanto debe considerarse que si las partes celebraron el contrato, han querido dar nacimiento al negocio y no lo contrario (31). El elemento sistemático obliga a interpretar el negocio en su integridad, obstante a la interpretación aislada de una cláusula o expresión del contrato (32); impone el deber de observar el lazo íntimo que une todas las cláusulas para lo cual puede ser relevante tomar en cuenta las conductas de los contratantes anteriores, posteriores y concomitantes a la celebración del contrato (33). Pero el elemento fundamental es el elemento histórico, ya que el encargado del funcionamiento debe buscar la real intención común de las partes. Si se logra conocer ésta y coincide con lo expresado en la norma contractual interpretada, concluye allí la labor del intérprete. Si no coincide lo manifestado por las partes con lo realmente querido, habrá de adecuar las normas contractuales restringiendo o extendiendo su alcance (34).

El verdadero problema en el funcionamiento de la norma contractual se plantea cuando ésta no existe o cuando existe pero es injusta. Es decir, cuando existe una carencia histórica de norma contractual, porque las partes no previeron una determinada circunstancia, o una carencia dikelógica, porque lo previsto resulta injusto. Cabe aquí preguntarse si puede un tercero, el juez o el legislador, por ejemplo, elaborar la norma adecuada para el caso (35). En el primer supuesto, no existe ninguna duda en nuestro derecho, ya que se encuentra expresamente previsto en el Art. 219 C. de C., el legislador manda elaborar la norma, presumiendo que las partes han pretendido sujetarse a lo que es de uso común en el comercio en el lugar de ejecución del contrato.

La dificultad más compleja se presenta cuando las partes han previsto una norma contractual y ésta es injusta. En algunos casos, donde generalmente se encuentra afectado el orden público, es el mismo legislador el que manda ignorar la cláusula contractual injusta y dispone cómo elaborar la norma justa, por ejemplo, la cláusula que dispense el dolo no tendrá valor alguno (Art. 507 CC.), la cláusula que libere de toda responsabilidad por evicción no excluye dicha responsabilidad cuando media mala fe de parte del enajenante (Art. 2099 CC.); la clau-
sula que prevea el pacto comisorio expresó en la compraventa de lotes por mensualidades no puede ser aplicada cuando el adquirente hubiere abonado más del 25 % del precio o efectuado mejoras por un valor equivalente al 50 % del mismo (Art. 8 de la ley 14.005); la cláusula que impida al locatario de inmueble destinado a vivienda, resolver el contrato anticipadamente después de transcurridos los primeros seis meses de locación no tiene efectos (Art. 8 y 29, ley 23.091). En otros supuestos la jurisprudencia y la doctrina han admitido que el juez pueda elaborar la norma justa, por ejemplo, en los contratos por adhesión a condiciones negociales generales (36).

Creemos que cuando la norma contractual es injusta, en casos de notoria injusticia, excepcionalmente, el juez está facultado para recurrir a la heterointegración del contrato y elaborar la norma justa (37). Dada esa situación es fundamental que el encargado del funcionamiento sepa que con la sola interpretación no acaba su labor, sino que, a fin de realizar la justicia del caso concreto, debe decir que, dejando de lado la voluntad de las partes es él quien elabora la norma justa.

6.1. La interpretación de un contrato es un reparto de potencia e impotencia que promueve el intérprete, porque interpretar es entender, entender para obrar, es decir, para adjudicar potencia e impotencia a los contratantes.

Acerca de quién puede interpretar, en principio, son las partes contratantes quienes deben entender su propio negocio, y en caso necesario, producir un nuevo contrato, adjudicándose potencias e impotencias, según ese nuevo entendimiento. Generalmente es el juez el llamado a interpretar, se constituye en este caso en supremo repartidor.

Como efecto de la interpretación se beneficia a una de las partes contratantes, reconociendo por ejemplo una prestación a su favor, mientras que se grava a la otra. En ocasiones, quien resultaba beneficiado por el contrato se convierte en recipiendario gravado. Así, por ejemplo, en el contrato por adhesión las cláusulas ambigas o oscuras se interpretan contra el predisponente. Es decir, se produce una trasmudación del reparto, el predisponente que resultaba beneficiado en el contrato originario resulta ahora gravado, recibe una carga, no poder exigir la prestación que unilateralmente había predispuesto.

En referencia a la forma de la interpretación, puede ser la negociación con miras a un nuevo contrato (cuando se trata de interpretación auténtica, efectuada por los mismos contratantes), el denominado contrato de determinación o fijación por algunos juristas, o puede ser que el reparto interpretativo se derive de un proceso, cuando el llamado a interpretar sea el juez. En este proceso no debe confundirse la interpretación con la prueba de los hechos fácticos. La prueba es anterior, debe preceder a la interpretación (38).
Interesa saber por qué se interpreta, cuál es la razón de la interpretación, es éste un punto discutido en la doctrina. Para algunos se interpreta un contrato porque contiene cláusulas ambiguas, oscuras, si el contrato es claro, no hay razón para interpretarlo (39). Por nuestra parte entendemos que un contrato se interpreta para conocer la voluntad de los autores y así poder ordenar el cumplimiento de dicha voluntad. No se interpreta porque es oscuro, debe interpretarse siempre (40), porque es necesario que las partes o, en su caso el juez, hagan cumplir lo querido por los contratantes y para ello es necesario primero su conocimiento. Puede suceder que un contrato sea claro, sumamente claro y no respondan a lo querido por las partes, acreditándose esa discordancia el encargado del funcionamiento de las normas deberá adaptar la letra del contrato a la auténtica voluntad de sus autores.

En cuanto a la clase de reparto que produce la interpretación se trata de un nuevo reparto autoritario, cuando quien interpreta es el juez; mas puede ser un nuevo reparto autónomo, cuando las partes son las que interpretan su contrato produciendo el contrato de determinación. Como los repartos autónomos son superiores a los autoritarios desde el punto de vista óntico y dikelógico, creemos preferible propiciar la interpretación auténtica, para evitar la transformación del primitivo reparto autónomo (contrato) en reparto autoritario (sentencia interpretativa).

Toda interpretación tiene límites, el intérprete está condicionado por la real naturaleza de las cosas. En algunas ocasiones los jueces al interpretar los negocios jurídicos se amparan en el límite lógico y, desprendiéndose de la vida, se refugian en la lógica produciendo resultados que en la dimensión dikelógica podremos calificar como injustos. Los límites más importantes que debe respetar el intérprete son las leyes sociales y las realidades económicas. En efecto, el juez al tratar de conocer el negocio jurídico, para ser fiel al pensamiento manifestado de los contratantes, deberá tener presente los usos sociales del lugar donde se haya celebrado tal negocio, pues evidente que las partes los han tenido en cuenta al contratar, y si querían algo contrario a dichos usos sociales debieron así manifestarlo expresamente (41). La realidad económica es otro de los límites que condiciona al intérprete, pues los contratantes al fijar su consentimiento lo han hecho atendiendo a esa realidad, si luego se trata de investigar lo querido por ellos, la búsqueda debe realizarse en ese marco (42).

La interpretación judicial contribuye en gran medida al orden en la sociedad, mediante la ejemplaridad. Esto se observa, por ejemplo, en la importante tarea que ha cumplido la jurisprudencia ante el avance de la contratación masificada, ya sea a través de contratos por adhesión o condiciones negociales generales, los jueces han ido integrando los contratos, produciendo carencias dikelógicas para proteger a la parte débil en la contratación y han generado un verdadero
derecho espontáneo. Por esto en nuestro país, hoy son normas uniformemente admitidas que las cláusulas oscuras o ambiguas de un contrato predispuesto deben ser interpretadas contra el predispuesto, o que las cláusulas manuscritas prevalecen sobre las preimpresas.

7. Corresponde observar ahora a la interpretación desde la dimensión de la justicia.

En principio la interpretación de un contrato debe tender a realizar la justicia conmutativa, que es la que han tratado de lograr los contratantes en el negocio interpretado. En cambio, cuando el elaborador de la norma contractual trasciende los límites de la interpretación porque ésta no resulta justa, en la elaboración se realiza generalmente la justicia espontánea. Por ejemplo, cuando en caso de duda se está en favor de la parte más débil. Es posible admitir también que se realice la justicia con acepción de personas cuando se interpreta teniendo en consideración la calidad, en una o ambas partes, de comerciante, consumidor o locatario (43).

Normalmente todo intérprete tiene claro que en su tarea realiza predominantemente el valor poder, ya que la norma resultará coactiva, y también el valor previsibilidad, pues debe tener en cuenta aquéllo que las partes han querido al contratar. Lo que más asiduamente se olvida es que las normas contractuales deben realizar los valores cooperación y solidaridad, de tal modo que, si la norma interpretada se alza contra esos valores, es beneficioso que el encargado de su funcionamiento elabore aquéllla que tienda a la realización de los mismos.

El intérprete para realizar el máximo de justicia debería poder conocer todo el pasado del negocio jurídico, todo el presente y todo su futuro. Por ser ello imposible debe fraccionar, por ejemplo, tomando en consideración sólo la voluntad manifestada por los contratantes y no la voluntad interna. No obstante, deberá siempre procurarse la mayor cantidad de datos en relación a las conductas anteriores, posteriores o concomitantes con el negocio jurídico.

Atendiendo a la justicia de la interpretación en sí misma, consideramos que es más justo que los intérpretes del contrato sean los mismos contratantes, siempre que se garantice la igualdad y libertad jurídica y económica. Es decir, siempre que no exista subordinación jurídica y económica de una de las partes, debe preferirse la interpretación auténtica, en caso contrario, el intérprete debe ser el juez. En ese caso, al generarse un reparto autoritario se produce ya cierto grado de injusticia.

Estamos persuadidos que el principio supremo de justicia es la personalización del hombre y que uno de los medios para su realización es la protección del individuo contra los demás. Por ello, creemos que superando la interpretación debe tenderse, en ocasiones, a la realización de esa protección mediante la
elaboración. Es por esto que resultan justas la elaboración que protege al contra- 
tante débil contra el fuerte, la que desecha la cláusula abusiva y elabora la norma 
adecuada para proteger a un contratante contra el otro, la elaboración que trata 
de proteger a ciertas minorías que en la realidad social se encuentran carencia- 
das (por ejemplo, ciertos locatarios de inmuebles destinados a viviendas, adqui-
rentes de vivienda única, adquirentes de bienes de uso imprescindible por siste-
mas de ahorro previo).

(1) Para el desarrollo del tema se empleó el método expuesto por el prof. Werner Golds-
chmidt en su obra Introducción filosófica al Derecho, Depalma, Bs. As., 6a. edición, 
1980. Asimismo se trabajó en base a: CIURO CALDANI, Miguel A., Meditaciones 
trialistas sobre la interpretación, en E.D., t. 72 pág. 811 y ss.

(2) p.v. MESSINEO, Francesco, Doctrina general del contrato, trad. Fontanarrosa, Sen-
tís Melendo, Volterra, E.J.E.A., Bs. As., 1952, t. II, pág. 88, este autor a la interpre-
tación de un contrato en particular la llama interpretación de segundo grado, la que 
está preparada por la interpretación de las normas sobre la interpretación del negocio. 
En igual sentido, FONTANARROSA, Rodolfo O., Derecho Comercial Argentino, 
Doctrina general de los contratos comerciales, Víctor P. de Zavalía, Bs. As., 1979, 
t. II, pág. 152.

(3) El contrato es una fuente real de constancia formal de normas (GOLDSCHMIDT, w., 
op. cit. pág. 217). En sentido contrario p.v. BETTI, Emilio, Interpretación de la ley 
de la ley y de los actos jurídicos, trad. José Luis de los Mozos, Edit. Revista de Dere-
cho Privado, Madrid, 1975, p. 345. En un reciente trabajo VIGO (h), Rodolfo L., In-
terpretación jurídica de los contratos civiles, L. L. 1986 - A, p. 796, ubica dentro de 
la teoría de la norma jurídica a la norma jurídica contractual.

(4) LOPEZ DE ZAVALIA, Fernando J., Teoría de los contratos, Parte general, 3a. edi-
ción, Víctor P. de Zavalía, Bs. As., 1984, pág. 279, considera, por el contrario, que el 
Código Civil posee una norma decisiva, el Art. 1197, que implica la consagraci6n del 
carácter normativo del contrato, el que debe ser interpretado del mismo modo que 
la ley.

(5) MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, Ediar, Bs. As., pág. 262.

(6) LAFAILLE, Héctor, Derecho civil. Contratos, Ediar, Bs. As., 1953, T. VIII, vol. 1, 
pág. 350.

(7) SPOTA, Alberto G., Instituciones de Derecho civil, Contratos, Depalma, Bs. As., 1974. 
Vol. II, págs. 80 y ss.

(8) MASNATTA, Héctor, Interpretación de los contratos en la ley y jurisprudencia argen-
tina, en Boletín del Instituto de Derecho Civil, Univ. Nac. del Litoral - Fac. de Cienc-
ias Jurídicas y Sociales, Sta. Fe, Nº 1 1959, pág. 24.

(9) LAFAILLE Héctor, op cit. pág. 343, nota Nº 179.
(10) P. v. respecto de la naturaleza civil de normas insertas en el Código de Comercio, el informe de la Comisión Redactora del C. de C. de la Pcia. de Bs. As. (ADLA, t. 1852-1880, págs. 219 y ss.). Los redactores manifiestan la necesidad de contar con el Código Civil que contenga las normas generales en materia de contratos, pero ante su carencia, dicen: "Hemos tomado entonces el camino de suplir todos los títulos del Derecho civil que a nuestro juicio faltaban para poder componer el Código de Comercio" (pág. 225).

10 bis. Acerca de la intención del Codificador es muy esclarecedor el voto del Dr. Llambías, en autos "Antonetti, José H. c/Khan de Levy, Francisca B.E. y otros" cuando dice: "El código civil argentino se ha abstenido de dictar normas de interpretación de la voluntad, tal vez por entender que ellas, por su propia índole más que por obra del legislador, pertenecen a la ciencia del derecho", CNC. Sala A, 28-6-60, L. L. 99-349.

(11) LAFAILLE, Héctor, op. cit. pág. 348. La denominación "normas abiertas" corresponde a REZZONICO, Juan Carlos, "La buena fe como norma abierta para la interpretación de los contratos y límites de la interpretación", en L.L., t. 1983-C, pág. 270.


(15) MESSINEO, Francesco, op. cit. pág. 88; LOPEZ DE ZAVALIA, Fernando J., op. cit., pág. 278.

(16) Sobre el polémico tema de la elaboración de normas, expresamos nuestra opinión en este mismo Boletín, N° 7 págs. 65 y ss.

(17) ver infra punto 5, en especial nota N° 25.

(18) Confr. DANZ, Erich op. cit. pág. 275 Este autor considera que la costumbre que debe tenerse en cuenta es la del lugar de celebración del negocio jurídico, pero, a su vez, aclara que el conocimiento de los usos sociales por los contratantes no es necesario, pues sus efectos se producen aun cuando los desconozcan (pág. 177) El Código Civil francés en el art. 1159 considera aplicable los usos del país de celebración del contra
to. LOPEZ DE ZAVALIA, op. cit. pág. 282, parece admitir, en principio, la costumbre del lugar de ejecución, pero sólo para el caso de que fuera determinable al tiempo de contratar. En sentido contrario a nuestra opinión p.v. LAFAILLE. Héctor, op. cit. pág. 347, nota 202.

(19) Respecto de la regla "favor debitoris" en su moderna interpretación, puede verse su tratamiento en las X Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en Corrientes del 31-7 al 4-8-85. En favor de la parte más débil, se pronunció la C.N.C. Sala C, 2-4-81, autos "Pizzolo S.A. c/Mario Somogyi, Miguel A.", E.D. 93-495.

(20) Confr. MESSINEO, Francesco, op. cit. pág. 91; MASNATTA, Héctor, op. cit., pág. 11. Para VIGO, Rodolfo L., pág. 3 están dirigidas indistintamente al juez o las partes, no deben establecerse prioridades.

(21) Contra MESSINEO, Francesco, op. cit., pág. 95, después de sostener que las reglas legales de interpretación son imperativas agrega: "... no se entendería de qué modo podría el intérprete separarse de tales preceptos que guían hacia la consecución del fin mencionado para seguir criterios distintos; ni se explicaría cómo, si existieran en realidad criterios distintos, el legislador no los ha codificado".

(22) P.v. CIURO CALDANI, Miguel A., op. cit. pág. 816.

(23) Acerca de la clasificación de la justicia desde el punto de vista del criterio de fundamentación de los repartos, en justicia conmutativa y espontánea, ver CIURO CALDANI, Miguel A., Estudios de Filosofía Jurídica y Filosofía Política, Fundación para las investigaciones jurídicas, Rosario, 1984, t. II, pág. 50. Explica este autor que en la justicia conmutativa el fundamento es plurilateral, a la prestación le sigue la contraprestación (ej. la compraventa); en la espontanea, el fundamento en unilateral, hay sólo una prestación (ej. la donación).

(24) Confr. CIURO CALDANI, Miguel A., Meditaciones..., pág. 817.


(26) DANZ, Erich, op. cit., pág. 78.

(27) GARCIA AMIGO M., Condiciones generales de los contratos (civiles y mercantiles), Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969, pág. 187; MORELLO, Augusto M. Dinámica del contrato. Enfoques, Librería Editora Platense SRL, La Plata, 1965, pág. 44; STIGLITZ, Rubén S., Directivas específicas de interpretación de los contratos por
adhesión a condiciones generales, en L.L. 1983-B, 1131; NICOLAU, Noemí L. Las condiciones negociales generales en su relación con las fuentes de las normas, en Revista de la Facultad de Derecho, Rosario, N° 4/6

(28) GOLDSCHMIDT, Werner, op. cit., pág. 210 y ss.

(29) P. v. SAVIGNY, F. C. de, Sistema del Derecho Romano actual, trad. Ch. Gue

noux, J. Mesía y Manuel Poley, Góngora, Madrid, 2a. edic., 1878, t. 1, pág. 187. LA


(31) Al respecto son interesantes las consideraciones de SPOTA, Alberto G., op. cit. pág. 102 y ss. La jurisprudencia ha dicho: "Debe preferirse no el significado inútil y que conduce a la invalidez de la cláusula contractual o de todo el contrato, sino el signi

ficado útil o que conduce a la validez", CNEspecial, CC. S.III - 18-9-79, autos "Mayola y Cía. c/Pallito, Carmelo", RED. T. 14 pág. 222, N° 38.


125 - E.D. 95-441; CNCiv. S.B., 8-9-81, autos "Capo, Julián J. y otra c/ Del Sol Cons


(33) DANZ, Erich, op. cit. pág. 52, para quien el juez no debe tener en cuenta sólo las pal


do M. c/Micave S.A.", E.D. 107-559; SC. BS. As., 11-8-81, autos "Sade SA. c/ Mu


sa, Omar J.", DJBA., 123-447.

(34) GOLDSCHMIDT, Werner, op. cit. pág. 267. SPOTA, Alberto G., op. cit. pág. 73, en tiende que se trataría de rectificación de la voluntad declarada, operación que consi
(35) Se plantea de este modo el problema de la integración del contrato, P.v. ENNECERUS-KIPP WOLFF, op. cit. pág. 399; LARENZ, Karl, op. cit. pág. 256; BETTI, Emilio, op. cit. pág. 369, aclara que debe diferenciarse la interpretación integradora de la integración, ésta última reiere a los efectos del negocio, cuando existe una laguna en la idea misma del negocio; MASNATTA, Héctor, op. cit. pág. 10. Para LOPEZ DE ZAVALIA, Fernando J., op. cit. pág. 274, es erróneo distinguir integración de interpretación, la primera forma parte de ésta última.

(36) P. v. bibliografía citada en nota 27 y además, MOSSET ITURRASPE, Jorge, Justicia contractual, Ediar, Bs. As. 1978, pág. 48. La CNC.S.B., 29-7-80 ha dicho: "Los jueces no deben aplicar el derecho con indiferencia por los resultados. El apego a lo pactado debe ceder cuando algún elemento posterior al contrato, ajeno a las partes y presumiblemente no querido ni previsto por ellas, viene a distorsionar de manera grave la naturaleza misma de la relación jurídica tenida en vista, convirtiendo en los hechos y en la realidad de la vida lo que fue concebido como oneroso en gratuito" (E.D., 91-170).


(38) DANZ, Erich, op. cit. pág. 44; BETTI, Emilio, op. cit. pág. 240.


(40) MASNATTA, Héctor, op. cit. pág. 17; REZZONICO, Juan Carlos, op. cit. pág. 279; SPOTA, Alberto G., op. cit. pág. 85; LOPEZ DE ZAVALIA, Fernando J., op. cit. pág. 267; VIGO, Rodolfo O., op. cit. pág. 797. La CSJN, el 28-3-78, en autos "Vianini S.P.A. y Supercemento SAIC. c/Obras Sanitarias de la Nación" ha dicho: "En la interpretación de los actos de los cocontratantes, ha de buscarse lo efectivamente querido, precisando lo ambiguo, oscuro o incompleto, pero sin olvidar que el empleo de término claros en apariencia no implica siempre una voluntad igualmente clara". En cierto modo también la CNC.S.F., admite que el juez puede interpretar más allá de las palabras, en el fallo de fecha 9-10-81, autos "Lion, Elisa c/Sutiaga", E.D. 97-725.

(41) CNC. S.F., 25-9-80, autos "Barroso de Sánchez Ruiz, Betti M. c/Sánchez Ruiz, Raúl", RED. T 16, pág. 243 N° 27; CNC.S.E., 24-8-82, E.D. 102, 530.

(42) DANZ, Erich, op. cit. pág. 93 y ss.

(43) Idem pág. 281